

Recuperadores de residuos, Conflicto y Desechos: políticas “ambientales” que desechan, consumen y reciclan energías vivas (San Francisco, Villa María y Córdoba, 1999-2020)

Por Ignacio Pellón¹

Introducción

Como punto de partida, el objeto de este escrito nos sitúa en 1999, cuando la Agencia Córdoba Ambiente comienza a implementar el *Programa Córdoba Limpia*. Esta nueva política provincial se orientaba al cierre de los basurales a cielo abierto (BCA) municipales y a la construcción de “vertederos controlados” regionales. La adjudicación de nuevas obras y servicios públicos revitalizaron los negocios para un puñado de empresas, especialmente, en lo referido a la recolección-traslado-disposición final. Al respecto, la estrategia provincial pregonaba la acción inter-municipal, sosteniendo que “*resulta inviable técnica y económicamente buscar la solución en el marco de la gestión estrictamente municipal*” (Programa Córdoba Limpia, 1999).

El diagnóstico provincial, sin embargo, no ofrecía ninguna evidencia empírica respecto a la imposibilidad de una gestión eficiente a nivel municipal. A su vez, la falta de integralidad en el diseño de la política “ambiental” se manifestaba en una serie de municipios y comunas no contemplados (desechados) debido a su lejanía respecto a las principales ciudades. Además, desde miradas atenta a los agentes sociales y su reproducción social, el cierre de los BCA y su regionalización no mencionaba “impacto social” alguno. En ese sentido, los casos de San Francisco y Villa María evidencian la falta de recursos económicos y técnicos provinciales, y muestran a municipios gestionando el conflicto social por sus propios medios, contando con el auxilio de políticas sociales del Estado nacional (Aimar, Giannone y Lisdero, 2007; Delgado, Herrera, Aimar, 2008).

Por último, vale destacar que la *erradicación del cirujeo* se presentaba como un medio necesario para una *Córdoba Limpia*, dando una respuesta “adecuada” a una problemática que concierne “a todos”. No obstante, el destino de las muchas familias abocadas a la recuperación de residuos en los BCA, quedaba librado a su suerte (Aimar, Giannone y Lisdero, 2007:10). En este marco, el presente escrito ofrece un breve repaso por algunos de los episodios conflictuales más destacados desde 1999 hasta 2020, en las ciudades de San Francisco, Villa María y Córdoba. Interesa, muy especialmente, visibilizar a los actores colectivos integrados por recuperadores de residuos y a las organizaciones sociales, sindicales, empresariales y políticas que buscan “erradicar”, organizar y/o representar a los primeros.

Para cumplir con lo propuesto, en primer lugar, se utilizan fuentes de información secundarias, como bibliografía especializada, artículos periodísticos y sitios institucionales-estatales, y fuentes primarias, como entrevistas en profundidad (EP) y notas de campo (NdC). Tras las caracterizaciones realizadas para San Francisco, Villa María y Córdoba, en una última sección se ofrecen algunas reflexiones y se actualizan los interrogantes al calor del *Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto*, de implementación reciente.

¹ CIT Rafaela (UNRaf-CONICET) – Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Sociales (CIECS – CONICET y UNC). E-Mail de contacto: pellonignacio@gmail.com



San Francisco

Comenzando por la ciudad de San Francisco, en 1991, el Estado municipal contrató a ASHIRA S.A. para prestar el servicio de recolección domiciliaria de basura y, en 1994, inauguró su primer relleno sanitario. Poco después, en este predio se incorporó a un grupo de cirujas que recibían un *subsidio* municipal de 60 pesos semanales. Para potenciar la productividad de estos trabajadores, un empresario local “prestó” una prensa-enfardadora, asegurándose la compra y cierto acondicionamiento de los residuos recuperados. Este esquema se mantuvo hasta 1999, cuando el nuevo gobierno local eliminó el *subsidio* y, cinco años después, los cirujas fueron expulsados del predio municipal “*para proteger su salud*” (Aimar, Giannone y Lisdero, 2007).

Los esfuerzos municipales por desechar el trabajo de los cirujas, fueron respondidos con una acción de protesta y bloqueo del acceso al vertedero. Ante el persistente reclamo de dar continuidad a dicho espacio de trabajo, la respuesta estatal consistió en el ofrecimiento de inscripciones al *Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupado*. Un grupo de cirujas rechazó los planes e inició acciones legales buscando demostrar su relación de dependencia con el Estado municipal; vínculo que, claramente, estaba informalizado. En poco tiempo, el precoz “relleno sanitario” devino en basural a cielo abierto (BCA) sin ningún tipo de acción de tratamiento, recuperación ni discriminación entre desechos domiciliarios, patógenos y demás (idem).

Una activa desidia estatal-municipal dio condiciones favorables a la introducción y difusión de “la solución provincial”: construir un vertedero regional, auspiciado por la Agencia Córdoba Ambiente y financiado por un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De inmediato, el proyecto encontró oposición en la “Mesa por la Salud, el Ambiente y el Trabajo”, el sindicato municipal (SUOEM) y una organización ambientalista. Este grupo denunciaba los riesgos implicados en convertir a San Francisco en receptor de la basura de otras 18 localidades y reivindicaba las demandas laborales de los cirujas “desechados”.

En busca de conocer las visiones y versiones de los recuperadores de residuos, fueron entrevistados 32 trabajadores del conglomerado urbano San Francisco-Frontera-Josefina.² La mitad de los informantes afirmaban haberse iniciado en el oficio en los últimos 5 años –un 9% recolectaba desechos en carros a caballo. En la mayoría de los casos, los momentos para vender los materiales recuperados estaban conectados a las capacidades para “aguantar el material”. Estas condicionalidades obedecían, mayormente, a las materialidades (físicas-económicas) de cada hogar. Por otra parte, los compradores-acopiadores locales eran muy pocos y, según los propios cirujas, mantenían acuerdos para no competir en los precios de compra. En algunos casos, los dueños de los depósitos “prestaban” dinero en calidad de adelanto de ventas futuras; prácticas que los cirujas valoraban como gestos de amistad.

Primero trabajé en la fundición, después trabajaba acá en el matadero ... y el matadero San Justo viste que cerró, bueno nos quedamos todos sin trabajo y de ahí no conseguí más trabajo efectivo. (...) he ido al tambo, de albañil, he trabajado muchísimo, pero calculá, ya después no puedo laburar más porque no me da (...) (Recuperador en Aimar, Giannone y Lisdero, 2007: 11).

² Las mismas fueron realizadas por el “Grupo de Estudios Sociales Serafín Trigueros de Godoy”, integrado por Lucas Aimar, Julia Bertone, Federico Díaz Llorente, Vanina Fraire, Gabriel Giannone, Martín González, Pedro Lisdero, Gabriela Orellano, Alejandra Peano y Gabriela Vergara; dirigido por Adrián Scribano.



En este pequeño repaso del caso sanfrancisqueño, las y los investigadores interpretaban a los cirujas como una especie de “entregadores” cuentapropistas-independientes, proveyendo mercancías a depósitos que intermediaban con la industria del reciclado (Aimar, et al., 2006). En conexión, el Estado municipal trataba a los cirujas como “entregadores” de una *energía viva* a su disposición, para ser consumida/desechada según cada política “ambiental”. En tales acciones, los *subsidios* y *planes sociales* muestran mecanismos de la intervención estatal, orientados a desplazar-neutralizar el conflicto protagonizado por un grupo de trabajadores que, otrora, entregaron su cuerpo a los procesos productivos del sector agropecuario, la industria frigorífica y metalúrgica local.

Tras este breve recorrido, en el próximo apartado se realiza un análisis similar, desde la vecina ciudad de Villa María.

Villa María

Entre los antecedentes por la apropiación de la basura en Villa María-Villa Nueva, merece recordarse que, en 1988, se conformó la pre-cooperativa “La Unión”. Este proyecto fue promovido por la escuela Chiquiciencia, buscando formalizar el trabajo de los cirujas en el vertedero de Villa Nueva. Hasta el año 1996, se logró cierta colectivización del trabajo. Cada miembro de “La Unión” recibía un pago en función de los kilos entregados, aunque las ventas nunca lograron cooperativizarse, siendo dificultadas por las necesidades inmediatas de cobro de cada trabajador. En ese sentido, el objetivo central de “La Unión”, comercializar directamente ARCOR S.A.I.C., nunca llegó a concretarse (Delgado, Herrera y Aimar, 2008).

Durante la vigencia de “La Unión”, los cirujas esporádicos e “independientes” vieron restringido su ingreso al basural. La privatización del vertedero se consolidaría a partir del año 2003, tras el desembarco del *Programa Córdoba Limpia* en Villa María. El Estado municipal adjudicó, entonces, la obra y la administración de una planta de tratamientos y separación de residuos a CORBAM S.A., y prohibió el ingreso de toda persona ajena a la firma. Al momento de la inauguración, la empresa había contratado a unos cincuenta trabajadores. La mayoría de estos tenían trayectoria en el cirujeo y, casi de inmediato, renunciaron. En diciembre de 2004, las autoridades municipales, dirigentes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), delegados de CORBAM y cirujas lograron un nuevo acuerdo.

El documento firmado por los mencionados actores, se enfocaba en la erradicación del cirujeo de las calles de Villa María, para lo cual, se preveía la implementación de un *Punto Limpio* cerca del basural. Este espacio sería el lugar de trabajo de los “*recolectores urbanos*”, quienes clasificarían los reciclables que la población acercaría por sus propios medios. La firma CORBAM, por su parte, se responsabilizaba por la constitución de una cooperativa de trabajo y por la compra de los residuos recuperados. De este modo, se lograría mantener a los cirujas fuera del basural y a los “cartoneros” lejos del centro de la ciudad, atendiendo a los intereses de la Asociación Comercial de Villa María (ACOVIM) (Delgado, Herrera, Aimar, 2008).

En 2005, ante los incumplimientos del municipio y su empresa concesionaria, cirujas de “La Unión”, acompañados por la CTA y otras organizaciones, realizaron una serie de protestas reclamando volver al basural. El conflicto ganó visibilidad social y las autoridades municipales “se anoticiaron” de una serie de graves irregularidades



que justificaban, con creces, la rescisión del contrato con CORBAM.³ Poco después, el 7 de febrero de 2006, se constituyó una *cooperativa de trabajo* que nucleaba a 48 ex trabajadores de la empresa en retirada. La nueva entidad recibió la concesión municipal de los servicios de enterramiento y recuperación de residuos; mientras que para los miembros de “La Unión” se gestionaron *planes sociales*, con contraprestaciones laborales enfocadas en la forestación y el mantenimiento de espacios verdes.

Las maquinarias se las quedó el municipio, nos dijeron que iban a formar una cooperativa, que no hiciéramos juicio, que no hiciéramos nada (...) (Recuperadora, “7 de Febrero”, en Delgado, Herrera y Aimar, 2008: 30).

Al mes siguiente, el Consejo Deliberante declaró la *Emergencia Ambiental* en Villa María. Rápidamente, la firma EMRE S.A. fue contratada para el enterramiento de los desechos y para dar asesoramiento técnico y comercial a la Cooperativa “7 de Febrero”. Esta última, quedó abocada a la selección, clasificación y acondicionamiento de residuos reciclables. La mayoría de los socios fundadores abandonaron sus puestos y la cooperativa fue altamente feminizada: a enero de 2008, había seis varones y catorce mujeres trabajando (entre ellas, tres socias fundadoras). En sus inicios, la “7 de Febrero” recibía un *subsidio fijo* por parte de la municipalidad, pero a partir de entonces, el pago quedó a cargo de EMRE. Como contrapartida, los residuos recuperados quedaban a disposición de la sociedad anónima, para su comercialización.

- (...) nosotros somos independientes pero el municipio condiciona.
- Independiente en el sentido de ganarnos los sueldos, pero independientes a veces en tomar decisiones... nos han multado, así que no nos conviene tampoco... estamos condicionados nosotros a seguir el camino que ellos quieren más allá de ser independientes (...) (Recuperadoras, “7 de Febrero”, ídem: 31).

En el contexto descrito, las políticas “ambientales” implementadas en Villa María, con y sin reciclado, introdujeron limpiezas, desplazamientos y nuevas condicionalidades para los actores individuales/colectivos. La “racionalización” de los negocios con la basura y la formalización laboral de los cirujas profundizó las lógicas de expulsión, precarización y feminización en torno a la apropiación diferencial de los desechos. En ese marco, el surgimiento y desarrollo de la “7 de Febrero” representa un fenómeno sumamente interesante. En un nivel, la cooperativa emergió como una especie de “empresa recuperada” ante las estafas ambientales, económicas y sociales perpetradas por empresarios y funcionarios públicos. En otro nivel, la cooperativa quedó *condicionada* e *independizada* por su supervivencia dentro de un *sector productivo desechado* por los capitales privados y estatales.

En términos generales, las materialidades de una planta de clasificación junto a un vertedero municipal “universalizaban” las relaciones sociales androcéntricas y estratificadas. La rudeza del trabajo, lo des-erotizante del ambiente (olores, colores, sabores...) y las condicionalidades del mercado/Estado convivían y eran tensionadas

³ Además de incumplir los compromisos para con “La Unión”, CORBAM incineraba unas dos toneladas diarias de residuos patógenos importados desde Córdoba, realizaba quemas a cielo abierto y enterramientos no controlados, entre otros incumplimientos contractuales (Delgado, Herrera y Aimar, 2008).



por “prácticas otras”. Las trabajadoras de la “7 de Febrero” producían no solo insumos industriales, sino también prácticas intersticiales que, a través de la sexualidad, el deseo y el placer (entre otras) desmentían las visiones y versiones impuestas “desde arriba”. Las vivencialidades y sensibilidades de las recuperadoras tramaban sociabilidades endogrupales y exogrupales en donde, por ejemplo, “(...) *el saber del oficio aprehendido por las mujeres se contraponen y disputa el conocimiento técnico del varón especialista*” (Vergara, 2008: 17).

Por último, la inscripción de las recuperadoras en una “doble jornada” laboral (doméstica/extra-doméstica) mostraba la doble explotación requerida por los procesos de las mercancías a reciclar. Paradójicamente, mientras que los objetos son asimilados por la industria del reciclado y las políticas “ambientales”; los sujetos co-bordean (*sensu* Scribano) una integración social *condicionada e independizada* (auto-responsabilizada). Por ello, el caso abordado presenta a cuerpos cooperativizados que “custodian” (que valoran y sostienen) los empleos desechados por las sociedades anónimas, el Estado y los varones (Vergara, 2008).

Avanzando en lo propuesto, a continuación se desarrolla un resumen de lo acontecido en Córdoba, en relación y contraste a lo observado en Villa María y San Francisco.

Córdoba

(...) Y cuando vino la democracia... ahí hicimos una juntada de carros, para que no nos los quiten. Mire usted: primero los militares nos dejaron sin ningún carro. Después, cuando llega la democracia, nosotros ya habíamos comprado carros porque estábamos movilizadas. Pero empezaron a corrernos y a quitarnos los carros. Entonces nos juntamos todos (“Chinina” Zamora, “Los Carreros”, en Vergara y Giannone, 2009: 21).

En la ciudad de Córdoba, el conflicto por apropiación de los desechos presenta a los carreros como claros actores protagónicos. Por eso mismo, cabe señalar que las nominaciones “cirujas”, “cartoneros”, “carreros” y “recicladores” (entre otras) hacen referencia a los diversos sujetos (y subjetividades) que conforman un grupo social que, en el campo académico, se conoce como *recuperadores de residuos*. Sin embargo, las interrelaciones entre los carreros, y entre estos y sus carros y caballos ocupan un lugar particular en el escenario social y político. En un punto, la *quita de carros* representa una práctica estatal recurrente, empleada para despojar a los carreros de sus animales y medios de trabajo. En otro punto, la sostenida privatización del servicio de higiene urbana y su inter-juego con los “recortes” del gasto público explican (parcialmente) por qué durante un “Congreso Nacional de Cirujas” se destacaba que “*Los cordobeses son especialistas en transporte de ramas y escombros*” (Página 12, 23/09/2001).⁴

El mencionado evento fue organizado por el Banco Mundial y la Fundación Conciencia, en septiembre de 2001, en instalaciones de los Suboficiales del Ejército

⁴ En septiembre de 2001, la Municipalidad de Córdoba habilitó unas 18 *escombreras* para que los carreros puedan descargar los restos de poda y escombros. Esta nueva política “de reciclado” se presentaba como una vía de ahorro en el gasto público, mientras se re-negociaban los contratos con CLIBA y TAYM (Grupo Roggio) (Pellón, 2019a).



Argentino en Saldán (Gran Córdoba). En tal ocasión, se reunieron representantes de las cooperativas “Los Carreros” y “Villa Inés”, de Córdoba, con otros de Buenos Aires, Trenque Lauquen y Chile. El aumento de la pobreza y el desempleo, la salida de la convertibilidad (devaluación de la moneda nacional) y las restricciones para importar mercaderías, entre otros factores, dieron condiciones para una expansión inusitada de la recuperación de residuos en calles y basurales. En ese contexto, la disputa por la apropiación de la basura se combinó con la lucha por el *uso legítimo del espacio urbano* (Vergara y Giannone, 2009).

Con el objetivo de “despejar” el tránsito en el área central, un nuevo decreto municipal (N° 111/02) estableció que “*los trabajadores del cartón*” debían dejar sus carros y animales en los márgenes del río Suquía; pudiendo ingresar al centro con carros manuales (traccionados por ellos mismos). Contra la política discriminatoria del “cuerpo carrero”, el 19 de julio y el 7 de agosto de 2002 se realizaron protestas masivas que fueron reprimidas por la policía provincial. En ese marco, Claudia Silva (de 19 años), hija de uno de los ocho manifestantes detenidos, sería elegida para presidir un proyecto cooperativo (Cooperativa “Carreros Organizados”) que, antes de concretarse, habría de transformarse.

Un grupo de trabajadores fue organizándose en torno a un nuevo basural emplazado en villa Sangre y Sol, alimentado por los camiones de CLIBA (empresa concesionaria del servicio de higiene urbana), de la propia municipalidad y otros que llegaban desde el Mercado de Abasto. En 2004, gracias a la intervención de la Asociación Civil “Raíces” se constituyó la Cooperativa “Cartoneros Organizados”, con más de cien asociados de Sangre y Sol, Villa Inés, Villa Boedo, Maldonado y Müller (Vergara y Giannone, 2009; Bermúdez, 2006).⁵

La nueva cooperativa era presidida por Pablo Silva (padre de Claudia) y realizó insistentes reclamos para que la Municipalidad les de participación en la “planta de reciclado” –instalada, en 1995, junto al relleno sanitario en Potrero del Estado (Bouwer). Por esos tiempos, la planta era operada exclusivamente por la Cooperativa “Villa Inés” aunque, en sus inicios, había sido un lugar de trabajo compartido (y competido) con “Los Carreros”. Por otra parte, en 2006, el Movimiento Federal Ambiental (MOFESA) conformó una rama específica para disputar en el campo de las políticas sociales de reciclado. Como hito fundante puede mencionarse el “Primer Encuentro Nacional de Delegados Cartoneros” organizado por el “Movimiento Nacional de Cartoneros y Recicladores” (MOCAR) en el Hotel Bauen (empresa recuperada), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.⁶

El MOCAR ingresó a la escena cordobesa por medio de “Raíces”, generando una multiplicación de las cooperativas del sector. En un período muy breve, se constituyeron las cooperativas “San José”, “Recicladores de Córdoba CORCOR” y “Movimiento de Carreros Unidos”. Conjuntamente, se inauguró una planta de clasificación y acopio de reciclables en barrio Bajada San José (contiguo al Cementerio San Vicente). Por otra parte, miembros del MOCAR y del Centro de Estudios y Formación “Agustín Tosco”,

⁵ “Natalia: ¿Cómo eligieron ese nombre? / Claudia: Raúl [de A.C. “Raíces”] nos trajo un folleto para que repartamos, lo leímos y ahí quedó, a mí no me gusta ese nombre, nosotros no somos cartoneros. / Pablo: Lo que pasa es que ya hay con ese nombre, es la de Villa Urquiza [“Los Carreros”], para diferenciarnos le pusimos así. Pero además, porque Raúl dice que incorporemos más gente, y como cartoneros es un nombre que todo el mundo entiende, es como más amplio (...)” (Bermúdez, 2006: 182).

⁶ El MOFESA estaba integrado por la Asamblea Ciudadana por los Derechos Humanos, el Frente Transversal Nacional y Popular, Libres del Sur, Barrios de Pie, Movimiento Evita, entre otras agrupaciones. Por su parte, la A.C. “Raíces” fue gestada en el año 2003, siendo integrante de la CTA (Vergara y Giannone, 2009).



promovieron la conformación de la Cooperativa “Reciclado e Inclusión”, agrupando a unas ocho familias de barrio Marqués de Sobremonte. Desde allí, se buscaba co-gestionar un proyecto de reciclaje que contemplara la atención médica veterinaria y la provisión de alfalfa y maíz a bajo costo, para los caballos de los carreros (Vergara y Giannone, 2009).

Ante el intento fallido de una nueva licitación del servicio público de higiene urbana, la Municipalidad de Córdoba creó *Córdoba Recicla Sociedad del Estado* (CRESE); firma que asumió las prestaciones en cuestión a partir de febrero de 2009. Dentro de la estrategia municipal, CRESE implementó la *Base Mitre*, para la recuperación de residuos reciclables, y *25 Puntos Verdes*, para “reconvertir” los basurales a cielo abierto (BCA) dispersos por la ciudad. El primer espacio ocupaba a miembros de “Cartoneros Organizados”, “Reciclado e Inclusión” y de la Fundación “El Faro”; mientras que en los segundos intervenían trabajadores asociados al “Movimiento de Carreros Unidos”. Al respecto, los referentes de cada cooperativa expresaban: “*Vamos a ser una especie de inspectores en 25 basurales de la ciudad*” (Héctor González, “Carreros Unidos”, en Pellón, 2019: 20).

Siempre trabajé en casas de familias, para mí este proyecto es algo muy nuevo, para lo que nos venimos preparando desde hace tiempo. Mis ocho hijos sí son cartoneros y conocen mucho del tema. Creo que si uno trabaja en conjunto los beneficios que se pueden conseguir con este trabajo van a ser mucho mayores. (Beatriz Rodríguez, “Reciclado e Inclusión”, en Vergara y Giannone, 2009: 24).

La misión de Corcor es el reciclado de plástico, que es un derivado del petróleo que se va haciendo cada vez más escaso en el planeta. La idea es contribuir a disminuir el enterramiento del plástico que es enterrar plata (...) (Carlos Torres, “CORCOR”, en Vergara y Giannone, 2009: 26).

En dicho contexto, la multiplicación de las cooperativas obedecía a cierta especialización respecto al objeto de trabajo y a la racionalización de los recursos “ambientales”, signados por la *escasez* y los *beneficios*. De modo que los actores buscaban integrarse dentro de la industria del reciclado y de la provisión de servicios públicos. En ese rumbo, los casi-*inspectores* municipales de “Carreros Unidos” ampliaron sus demandas hacia los trabajos de higiene y mantenimiento de la infraestructura urbana: “*nosotros pedimos lo que se nos había prometido: la limpieza del Canal Maestro. La gente de medio Ambiente contrató a una empresa de Río Cuarto (...)*” (Héctor González, “Carreros Unidos”, en Vergara y Giannone, 2009: 29).

Finalizando el año 2010, un grupo de trabajadores se apartó de “Carreros Unidos” y, junto “Raíces”, constituyeron la Cooperativa de Carreros y Recicladores “La Esperanza”. Este nuevo colectivo contó también con la participación de militantes del “Encuentro de Organizaciones” y, comenzó a trabajar para el programa *Puntos Verdes*.⁷ Entre los años 2010 y 2017, “La Esperanza” fue el gran protagonista del conflicto vinculado a colectivos de recuperadores de residuos en Córdoba, protagonizando el 43% de las manifestaciones registradas (presente en 39 de las 73 acciones conflictuales).⁸

⁷ “La EO” es una organización social y política creada en 2007, a partir agrupaciones barriales, estudiantiles y culturales. Integrante de la Confederación de Trabajadorxs de la Economía Popular (CTEP), desde 2013, y de la Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular (UTEP), desde diciembre de 2019 (EO, disponible en: <https://encuentrodeorganizaciones.org/> Fecha de consulta: 11/11/2020).

⁸ Para el registro del conflicto se utilizó la información disponible en el principal diario local (La Voz del Interior, formato digital) y se siguió un instrumento de análisis diseñado por Adrián Scribano (ver Pellón, 2019a).



Estamos descontentos con la gestión. La policía y los inspectores nos están robando nuestros caballos, hay apremios contra nosotros por andar con el carro. Queremos que nos incluyan en la limpieza de barrios y baldíos. Vamos a estar aquí por tiempo indefinido (Carlos Andrada, “La Esperanza”, en LVI 16/08/2012).

La práctica estatal de *quitar de carros* pasó a expresarse en torno a un *nosotros* (*sensu* Melucci) “marcado” por los *robos de sus caballos* y los *apremios por andar en carro*. Junto a las denuncias de discriminación, persecución y represión, se alzaron demandas por políticas públicas que *incluyan* a los carreros-recicladores *en la limpieza de barrios y baldíos*. De hecho, entre 2010 y 2017, la mitad de las demandas, reclamos y denuncias referían a *Políticas sociales* y actos de *Impunidad/Corrupción/Represión*. Conjuntamente, la mitad del bien-en-disputa gravitaba sobre *Políticas sociales* y *Caballos carreros*. En este sentido, la disputa por la apropiación diferencial de los desechos se desplazó, en gran medida, hacia el *uso legítimo de los caballos* (Pellón, 2019a, 2019b).

Los procesos de estructuración social en Córdoba y una aparente disposición de los sujetos carreros-recicladores para realizar trabajos de índole pública, encontraron cauce en la re-implementación del programa *Cuerpo de Servidores Urbanos Comunitarios*. Por medio de esta política social, en 2014, los convenios de CRESE con las cooperativas de carreros *migraron* hacia el área de Desarrollo Social. Así, miembros de “La Esperanza”, “Carreros Unidos” y “Barrios de Pie” pasaron a sostener servicios de higiene, mantenimiento urbano y cualquier tipo de actividad municipal. Desde el discurso estatal, la ocupación de los trabajadores representaba un medio para un fin: “*sacarlos del carro para esta cuestión de la tracción a sangre*” (EP5 26/01/2017).

Al cierre del año 2016, el responsable de Desarrollo Social municipal administraba medio millar de becas: “*la mayoría es carrero, si hay 500; 350 o 400 son de carreros*” (EP5, 26/01/2017). La política social fue incorporando organizaciones sociales y políticas des-vinculadas de los sujetos carreros-recicladores, mientras las contraprestaciones laborales atendían a la limpieza y el mantenimiento de plazas, espacios verdes y BCA, pero también de escuelas, dispensarios, CPC, cementerios y demás reparticiones municipales. Por otra parte, a poco de iniciado el año 2017, la “Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores” –conducida por el “Movimiento de Trabajadores Excluidos” (MTE) e integrante de la “Confederación de Trabajadores de la Economía Popular” (CTEP) – incorporó el término “Carreros” en su auto-denominación.

Poco después, la CTEP junto a “Barrios de Pie” y la “Corriente Clasista Combativa” (CCC) convocaron a organizaciones de todo el país a movilizarse en reclamo de la implementación de la *Ley de Emergencia Social*. El 15 de marzo, “La Esperanza” realizó una protesta con carros y caballos frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, exigiendo el pago de 14 becas adeudadas para las trabajadoras de comedores comunitarios y denunciando “*recortes*” en el gasto público-social y “*el crecimiento de la pobreza en nuestro país durante la gestión de Cambiemos*” (“La Esperanza”, en LVI 15/03/2017). En simultáneo, otras organizaciones de la CTEP organizaban “ollas populares” en la intersección de Av. Vélez Sarsfield y Bv. San Juan.

Mientras el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación avanzaba en los pliegos para la implementación de la *Ley de Emergencia Social*, los representantes de CTEP, “Barrios de Pie” y la CCC –tridente base de lo que hoy es la UTEP– acordaban el reparto de los primeros *Salarios Sociales Complementarios* (SSC). En Córdoba, estas transferencias de dinero comenzaron a implementarse en función de los acuerdos alcanzados entre



las organizaciones vinculadas a dicho espacio, encabezado por el “Movimiento Evita”, “Encuentro de Organizaciones” y “Patria Grande”, entre otras (NdC, 28/03/2017). Casi de inmediato, la vinculación formal entre el “Encuentro de Organizaciones” y “La Esperanza” quedó disuelta y, recuperando las tensiones producidas entre algunos de sus integrantes (NdC 15/03/2017), los delegados de Las Flores y La Tela se apartaron para constituir “La Igualdad”.

El 26 de junio, “La Igualdad” organizó una protesta en Av. Fuerza Aérea y Circunvalación, y en su intento de llegar hasta la sede de la intendencia, la caravana de carros fue bloqueada por la fuerza policial. Al día siguiente, los trabajadores se concentraron frente al palacio municipal sin carros ni caballos. Así, lograron visibilizar su reclamo por el pago de *becas* adeudadas.

La desvinculación transitoria de los carreros de La Igualdad obedeció a su ruptura con la cooperativa La Esperanza, a través de la cual sus asociados facturaban trabajos a la Municipalidad por la limpieza de espacios verdes en jurisdicción del CPC de la ruta 20, según explicitó Casati [subsecretario de Desarrollo Social]. (LVI 28/06/2017).

Además de explicar los procesos conflictuales y organizativos de las actores protagónicos, desde el área de Desarrollo Social municipal se publicitaba su política social: “*Este programa beneficia en la actualidad unos 450 trabajadores independientes de 19 cooperativas*” (LVI 28/06/2017). Por último, el itinerario realizado por los colectivos de carreros-recicladores, en Córdoba, manifiesta una expansión bifurcada o desdoblada. Por un lado, las cooperativas de cirujas, “cartoneros” y “recicladores” se ocuparon de trabajar las políticas de reciclado: en la *planta de Bouwer* (Potrero del Estado), la *Base Mitre* y los actuales *Centros Verdes*. Por otro lado, las cooperativas de carreros y “recicladores” se responsabilizaron (*independizaron*) por *recuperar* y *revalorizar* los servicios públicos y la infraestructura urbana.

Consideraciones finales

Entérminos generales, las caracterizaciones realizadas visibilizan un desplazamiento o, más bien, una diversificación de las cooperativas de recuperadores: desde su posición de “entregadoras” de mercancías desechadas/consumidas por la industria del reciclado; a su nuevo rol de “prestadoras” de servicios y obras desechadas/consumidas por el Estado. Estos movimientos, por su parte, no se explican sin la injerencia de las políticas públicas y la participación activa de organismos financieros internacionales, grupos empresarios y organizaciones sociales-políticas.

En San Francisco, el trabajo “ambiental” de los cirujas fue incorporado vía *subsídios* y desechado vía *planes sociales*, sin lograrse formalizaciones laborales. En Villa María, las cooperativas de recuperadores se conformaron mediante acciones conjuntas entre el Estado municipal y sociedades anónimas. Allí, los *planes sociales* se orientaron a “despejar” el conflicto y los *subsídios* a sostener y condicionar las cooperativas “independientes”. En Córdoba, las disputas por la apropiación diferencial de los desechos se fueron imbricando con intervenciones sociales-estatales enfocadas en controlar el uso legítimo del espacio urbano y de los animales, priorizando el tránsito vehicular (automotor) y, luego, “la cuestión de la tracción a sangre (animal)”.

En la actualidad, las empresas concesionarias del servicio público de higiene urbana son: Ashira S.A. en San Francisco; Cotreco S.A. en Villa María; Logística Ambiental



Mediterranea S.A. (zona centro), Urbacordoba S.A. (zona norte), Logística Urbana S.A. (zona sur) y Córdoba Obras y Servicios (ente autárquico que administra los Centros Verdes, el barrido urbano y otras tareas), en Córdoba capital. Dichas empresas son las que acumulan las ganancias en las políticas “ambientales”, con una centralidad en la logística, más que en la higiene urbana y la ingeniería ambiental. Mientras los principales contratos de servicios públicos son cedidos a grupos económicos cada vez más concentrados y globalizados, el campo de las cooperativas de trabajo se fragmenta más y más.

En línea con lo anterior, el caso de Córdoba parece emblemático, con unas 18 cooperativas “de carreros” contenidas dentro del programa de *Servidores Urbanos*, otras 4 cooperativas (“Cartoneros Organizados”, “Solidar”, “Nuestro Futuro” y “Milagro para los Niños”) trabajando a destajo dentro de los *Centros Verdes* (NdC 05/11/2020). Resulta notable, entonces, la expansión de la lógica de la racionalización de los recursos (naturales, humanos, sociales) entre los actores colectivos que compiten y cooperan por recuperar (¿reciclar?) los puestos de trabajo de desechados por “los ganadores de siempre” y por el propio Estado. Éste, en sus diferentes niveles, oficia de promotor y garante de los negocios privados de higiene urbana, traslado de residuos y disposición final; a la vez que, se posiciona como auxiliador y benefactor de políticas sociales condicionadas a trabajos que, además de precarios, flexibilizados y feminizados, se orientan a satisfacer las necesidades inmediatas del propio Estado.

En este contexto, veinte años después de la implementación del *Programa Córdoba Limpia*, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación lanzó “*un plan federal para una amenaza ambiental urgente*”, señalando a los BCA como “*el problema*”. Allí, se reconoce la existencia de 5.000 BCA en todo el territorio nacional, siendo “*uno de los riesgos ambientales y sanitarios más urgentes de nuestro país*”.⁹ Como respuesta, el *Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto* contempla la construcción de *Complejos Socioambientales* para el tratamiento diferenciado y eficiente de los residuos.

Formalmente, *Córdoba Limpia* y el *Plan Federal* comparten la concepción higienista-sanitarista de su objeto de intervención (“el problema de los BCA”) y la fuente de financiamiento (vía préstamos del BID). Por otra parte, se diferencian en que el primero soslaya la dimensión social, mientras que el último la enfatiza. Al respecto, el *Plan Federal* expresa: “*los recuperadores urbanos son el eslabón principal en la cadena de la economía circular*”. De tal modo, la estrategia nacional se orienta en cuatro direcciones complementarias: *Promoción de la economía circular*, *Sanearamiento ambiental*, *Generación de empleo* y *Reactivación económica*.

A partir del establecimiento del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), en marzo de 2020, las actividades de “*recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patógenos*” fueron declaradas *servicios esenciales*. Por eso mismo, se anuncia que parte de los recursos económicos “ambientales” destinados a la compra de maquinarias, serían complementados con la provisión de productos básicos para proteger la salud de las “*recicladoras y recicladores urbanos*”. En este contexto, los procesos de estructuración social en curso invitan a profundizar y tensionar los señalamientos anteriores, y a indagar en, al menos, dos direcciones.

Por un lado, la creciente institucionalización de la *economía circular* como “nuevo paradigma” parece conectada a prácticas y discursos producidos, reproducidos y difundidos por/para el *desarrollo sustentable*. Por otro lado, los intentos de federalización

⁹ <https://www.argentina.gob.ar/ambiente/contenidos/basurales>



y sindicalización muestran una actualización (¿reciclaje?) de los sujetos y subjetividades en disputa: “Cirujas”, hasta 2001; “Cartoneros”, con la salida de la convertibilidad monetaria; y “Carreros”, durante el desarrollo e institucionalización de la economía popular. Entonces, queda por avanzarse en dos direcciones: a) las relaciones entre “economía circular”, “desarrollo sustentable” y procesos de reciclaje anteriores (siglo XX y XIX); b) el “interregno” organizacional, social y político entre el fin del MOCAR y la reciente FACCYR.

Referencias

- AIMAR, et al. (2006). “Introducción a las problemáticas del negocio de la basura en San Francisco”. UNC-CEA, Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Social. San Francisco, julio de 2006.
- AIMAR, Lucas; GIANNONE, Gabriel y LISDERO, Pedro (2007). “Conflicto de la Basura en San Francisco: el lugar del ciruja en los negocios de la basura”, en SCRIBANO, Adrián (Comp.) Mapeando Interiores. Cuerpo, conflicto y sensaciones. Córdoba: CEA-UNC / Jorge Sarmiento Editor.
- BERMÚDEZ, Natalia (2006). El mundo de los carreros de Sangre y Sol. Una antropología sobre sus representaciones y prácticas. Tesis de Maestría en Antropología Social. Córdoba: UNC.
- DELGADO, Florencia; HERRERA, Hernando y AIMAR, Lucas (2008). “Protesta y conflicto en torno a la basura en Villa María”. Boletín Onteaiken, n. 6, diciembre, pp. 22-33.
- PELLÓN, Ignacio (2019a) “Identidad colectiva y Sensibilidades sociales. Acerca de la construcción social de las políticas para carreros-recuperadores en la ciudad de Córdoba (1970-2017)”. Boletín Onteaiken, n. 28, Córdoba, Dic., 2019. ISSN 1852-3854.
- _____ (2019b). “Proteccionismo animal y Conflicto social. Disputas y sensibilidades sociales respecto a los caballos carreros en la ciudad de Córdoba (Argentina)”. En “XXXII Congreso Internacional ALAS Perú 2019. Hacia un nuevo horizonte de sentido histórico de una civilización de vida”. Lima (Perú), del 1 al 6 de Diciembre.
- _____ (2020). “Políticas sociales y disposición final de la basura: CORMECOR ¿un nuevo “gigante” o un “pequeño” Leviatán?”, en Dettano, A (Comp.) “Políticas sociales y emociones: (per) vivencias en torno a las intervenciones estatales”, p. 171-193. C.A.B.A.: Estudios Sociológicos Editora. ISBN 978-987-3713-42-2
- VERGARA, Gabriela (2008). “De géneros, residuos y trabajo: experiencias etnográficas en la Cooperativa 7 de Febrero”. Boletín Onteaiken, n. 6, diciembre, pp. 10-21.
- VERGARA, Gabriela y GIANNONE, Gabriel (2009). “Carreros, cartoneros, cirujas y algo más. Hacia un mapeo de los colectivos de recuperadores de residuos en la ciudad de Córdoba”. Boletín Onteaiken, n. 7, mayo, pp. 20-30.

Artículos periodísticos

- Página 12 (23/09/2001). “Unidos por la basura. Crónica de un Congreso Nacional de Cirujas que organizó el Banco Mundial”, por Alejandra Dandan. Disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/2001/01-09/01-09-23/PAG29.HTM>



La Voz del Interior (16/08/2012). “Carreros protestaron frente al Palacio 6 de Julio”.
Edición digital.

_____ (15/03/2017). Carreros protestan frente al Ministerio de Desarrollo Social.
Edición digital.

_____ (28/06/2017). Principio de acuerdo con los carreros: vuelven las becas de 5 mil pesos. Edición digital.

